

Democracia liberal en Chile: una perspectiva histórica

Hernán Villablanca Z.

Departamento de Sociología, Universidad de Chile

En la actualidad se tiene una percepción ambivalente de la democracia. De una parte, se ha visto con entusiasmo la caída de los regímenes dictatoriales en América Latina y del "socialismo real" en Europa. De otra, sin embargo, cunden el desconcierto y el debate por la manutención de las desigualdades económicas y el alto desempleo en todas partes, y la aparición de signos evidentes de corrupción política y administrativa. ¿Qué está sucediendo, en definitiva, con la democracia liberal de Occidente?

Como concepto, el de "democracia liberal" resulta ambiguo y complejo. De ello están ciertos todos los científicos sociales y políticos. Como realidad, resulta también evidente que es un proceso cambiante y heterogéneo, cuya evolución futura, por lo mismo, es demasiado incierta para aventurarse en la formulación de pronósticos definitivos. Y de esto también están ciertos todos los especialistas. La cuestión sigue abierta, y es más profunda de lo que parece a primera vista: ¿hacia dónde va la democracia liberal occidental?

Al referirse a la situación chilena, M. A. Garretón distingue entre el proceso democrático (que tiene un largo alcance histórico) y la "transición democrática" (que involucra, más bien, ajuste

coyuntural). Si aceptamos los criterios establecidos por este autor, puede estimarse que la cuestión de la democracia liberal chilena tanto puede examinarse en función de los ajustes institucionales y coyunturales del sistema político, como —lo que parece más relevante— desde los procesos históricos donde han actuado y actúan los actores centrales de la sociedad civil. Sólo este último enfoque permite detectar procesos que se proyecten al futuro y perfilen la posibilidad de algún cambio socialmente inducido en el régimen liberal. Y éste será el rumbo que tomaremos en las notas que siguen.

Es evidente, para una perspectiva histórica, que los factores externos han estado regularmente presentes y han sido con frecuencia determinantes en el quehacer económico y político de la sociedad chilena y latinoamericana. Y en particular, en lo que dice relación con los proyectos de modernización.

Entre 1829 y 1891, por ejemplo, la influencia del capitalismo inglés profundizó el carácter mercantil de la economía chilena —ya marcado por la influencia hispánica—, carácter que pronto trascendió a otros ámbitos. Es cierto que, bajo esa influencia, se modernizaron la minería, el transporte y la

agricultura nacionales. Que, por ello, el país alcanzó por entonces un desarrollo considerable (sobre todo con relación a otros países de la región). Sin embargo, eso no significó un real despegue industrial del país —la manufactura sólo tuvo un incremento limitado—, sino, más bien, una expansión del capital especulativo y una difusión considerable de las ideas liberales.

La insuficiente modernización liberal desencadenada por el capitalismo inglés, se tradujo, por ejemplo, en la prolongada hegemonía política ejercida por la oligarquía terrateniente y la débil participación en el Estado de los otros actores empresariales y sociales. Esto, unido al hecho de que la modernización correspondía a la acción de un factor externo y no interno, determinó la evolución del sistema político chileno hacia el autoritarismo (Constitución de 1833 y régimen portaliano), más que hacia una democracia propiamente liberal. Las ideas liberales, aunque extendidas, no llegaron a constituir un Estado liberal, sino, más bien, una oposición a un régimen que se asumió como moderno y ejemplar.

El liberalismo, como oposición a un Estado moderno pero autoritario y socialmente discriminatorio (basado en el voto censitario), evolucionó después de 1850 en el sentido de transformarse en un proyecto liberal democrático, e incluso social democrático, más que en el sentido más restrictivo (burgués) del término. Es decir, se fue cargando de un cierto populismo. La emergencia de los grupos medios y la consolidación de un movimiento obrero organizado contribuyeron, sin duda, a que las concepciones liberales concluyeran por desenvolverse siguiendo la lógica del conflicto social más que la del desarrollo propiamente capitalista. Esta tendencia cristalizó en la remodelación del Estado en 1925, que se diferenció de la realizada en 1833, en que los nuevos actores sociales lograron democratizar el sistema político y ejercer una significativa influencia sobre él.

Después de 1930, los nuevos actores sociales —grupos medios y clase trabajadora, principalmente— lograron equiparar el poder político directo de la vieja oligarquía terrateniente y el indirecto de las casas comerciales extranjeras. El peso de las reivindicaciones sociales se sobrepuso a la lógica del

mercado y a la misma acumulación capitalista privada. La democracia liberal comenzó a evolucionar progresivamente hacia el socialismo de Estado, pero sin modificar en el fondo el modelo económico heredado del siglo diecinueve. De este modo, el control del proceso económico continuó dependiendo de las grandes empresas multinacionales (sobre todo respecto del sector exportador) y de la potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos).

El intervencionismo estatal, fortalecido con el gobierno del Frente Popular, transformó aun más el viejo modelo político liberal y, aunque tendió a favorecer al sector industrial, no logró, en ese contexto hiperdemocratizado, generar desarrollo integral. Sectores importantes, como el campesinado, por ejemplo, no sólo no se modernizaron, sino que incluso involucionaron.

Sin grandes modificaciones, esa situación se mantuvo hasta 1970. Todas las administraciones del período 1946-70, tras un período inicial de acción populista con política económica desarrollista, debieron, en un segundo período, modificar sus políticas en un sentido social represivo y económicamente liberal (conforme instructivos del Fondo Monetario Internacional). Así, todos enfrentaron una crisis económica a medio camino de su período constitucional, y una crisis social al término del mismo. El gobierno de Salvador Allende no escapó a ese ritmo, aunque contemplaba transformaciones estructurales conducentes a la toma del poder por el proletariado y sus aliados.

Se puede observar, pues, que desde 1833 hasta 1870 se produjo una continua evolución democrático-social dentro del sistema liberal-autoritario constituido en la primera de esas fechas. Es decir, se habría dado —en términos de M. A. Garretón— una continua "transición democrática". Los polos fueron el voto censitario y socialmente discriminatorio establecido por la Constitución de 1833, y la extensión del voto a analfabetos y jóvenes de 18 años en 1970. A lo largo de ese proceso, la aparición y consolidación de nuevos actores dio a esa transición un dinamismo social y una proyección no-liberal que obligó, en 1973, a una violenta intervención militar, que no intentó otra cosa que

reponer formas más puras y simples del modelo político liberal. Este golpe cierra, pues, el ciclo que abrió el golpe militar de 1829.

El Estado chileno, organizado al comienzo de su historia teniendo a la vista un modelo liberal no-democrático, evolucionó acumulando una cultura e identidad ideológica estatista, democrática, pluralista y crecientemente orientada al cambio social, tradición que, en 1973, fue desconocida y desintegrada.

La llamada "transición" iniciada en 1989, ¿a qué conduce? Sin duda, en tanto se atiene en gran medida a la Constitución de 1980, es democrática y es liberal. Pero no hay duda de que desconoce el rol de los actores propiamente sociales (protagónicos en modo creciente hasta 1973), proclamando, a cambio, el simple derecho a voto de los individuos aislados. Entre tanto, las Fuerzas Armadas han continuado activas en su autoasig-

nado rol de tutelaje sobre el régimen político civil. De hecho, la democracia liberal opera, en este caso, como un aparato formal que recubre y escuda a los grandes grupos de intereses (llámense oligarquías, élites, clases dominantes, etc.), mientras su *trend* de desarrollo es normal; pues, cuando no lo es, entonces no se vacila en el uso de la fuerza armada, según indica la historia.

Por consiguiente, podríamos llegar a una conclusión tentativa, bastante pesimista, en el sentido de que la actual transición conducirá a una democracia de tipo liberal o enmarcada dentro de márgenes dados por los poderosos grupos de interés internos y externos, con el riesgo permanente de alguna forma de intervención militar, y dentro de un contexto socioeconómico marcado por profundas desigualdades de oportunidades económicas, sociales y políticas.